

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009

Vistos los autos: "González Bellini, Guido Vicente c/ Río Negro, provincia de s/ daños y perjuicios", de los que

Resulta:

I. A fs. 213/249 se presenta Guido Vicente González Bellini y promueve demanda contra la provincia de Río Negro con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia del error judicial cometido en ocasión de haber sido condenado por el Juzgado n° 2 en lo Criminal y Correccional, Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Viedma, mediante sentencia de fecha 27 de julio de 1978, confirmada por la Cámara de Apelaciones de Viedma el 19 de junio de 1980.

Dice que por decreto provincial 23/73 fue designado interventor del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de Río Negro (en adelante I.D.E.V.I.), asumiendo las tareas previstas en la ley 597 para el Administrador General de dicho ente. Entiende que por ello gozaba de la garantía prevista por el decreto local 475 —reglamentario de la ley 200, que creó el instituto— para el cargo de Presidente del Consejo de Administración, según la cual su remoción, antes del vencimiento del respectivo mandato, solamente podía tener lugar por el procedimiento establecido en los arts. 151 y 152 de la constitución provincial, esto es, por acusación ante un jurado de enjuiciamiento.

Señala que después de producirse el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 fue obligado a presentar su renuncia al cargo de interventor que continuaba desempeñando en el I.D.E.V.I., la que fue aceptada por el interventor militar mediante el decreto 165 del 2 de abril de ese año.

Relata que meses más tarde, el 2 de agosto de 1976, fue detenido en la ciudad de General Roca por personal poli-

cial de la provincia e inmediatamente trasladado a la unidad carcelaria de Viedma, y que dos días después fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 1616/76. Indica que las actuaciones correspondientes a la instrucción policial fueron remitidas el 31 de agosto de 1976 al Juzgado n° 2 en lo Criminal y Correccional, Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Viedma y con fecha 9 de septiembre se solicitó al Ministerio del Interior de la Nación que fuera puesto a disposición del tribunal a efectos de tomarle declaración indagatoria. Este último acto procesal tuvo lugar el 13 de septiembre siguiente, imputándosele los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público, ambos en forma reiterada y en concurso real, en el marco de la causa n° 652/76 "Franco, Mario José y otros s/ malversación de caudales públicos y otros" y su acumulada n° 733/76 "González Bellini, Guido Vicente; Montoto, José Osvaldo y Marchisio, Luciano Alberto (ex funcionarios del I.D.E.V.I.) s/ malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario publico, abuso de autoridad reiterada".

Menciona que a mediados de septiembre de 1976 el juzgado interviniente dispuso convertir en prisión preventiva la detención que soportaba, ordenar la inhibición general de sus bienes, así como trabar embargo sobre el automotor de su propiedad hasta cubrir la suma de \$ 3.000.000 (ley 18.188). Tal decisión fue confirmada por la cámara de apelaciones.

Expresa que por decreto 2142/76 se dejó sin efecto su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero que continuó detenido hasta el 11 de noviembre de 1977 en que la cámara del crimen provincial le concedió la excarcelación bajo caución real de \$ 1.500.000 (ley 18.188), recuperando la libertad días después. Afirma que, en total, permaneció dete-

nido quince meses y doce días, de los cuales los primeros 41 días —período en el que estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional— los cumplió incomunicado en una celda de castigo y aislamiento.

Señala que el 27 de julio de 1978 la titular del juzgado rionegrino dictó sentencia única en las causas 652/76 y 733/76, antes aludidas, condenándolo a la pena de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de caudales públicos en concurso ideal con el delito de violación de los deberes de funcionario público, en forma reiterada. Tal pronunciamiento fue confirmado por la cámara de apelaciones y quedó firme al rechazar esta Corte una queja por denegación del recurso extraordinario federal, con fecha 23 de febrero de 1982.

Manifiesta que en 1997 solicitó y obtuvo del juzgado que lo había condenado la rehabilitación en los términos del art. 20 ter, primer párrafo, del Código Penal.

De modo particular destaca que en marzo de 2000 promovió un recurso de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro contra la sentencia condenatoria del 27 de julio de 1978, para lo cual invocó la causal prevista en el art. 448 inc. 5° del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, que contempla la procedencia de dicha vía en los casos de aplicación retroactiva de una ley más benigna. Expone que el tribunal hizo lugar al recurso interpuesto y declaró la nulidad de la sentencia única dictada en las causas 652/76 y 733/76, extremo que estima suficiente para la procedencia de la responsabilidad del Estado por un error judicial que lo llevó a una injusta detención y posterior condena. Solicita el resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que considera derivados de la irregular actuación del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, los que son detallados

y cuantificados en la demanda sin perjuicio de lo que en más o en menos resultare de la prueba. Solicita intereses e imposición de costas.

II. A fs. 270/283 se presenta la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro y opone la excepción de falta de legitimación para obrar a su respecto, en los términos del art. 347, inc. 3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Sustenta esa defensa argumentando que la responsabilidad que se postula en la demanda corresponde, en verdad, al Estado Nacional, pues han sido sus órganos los causantes del error judicial invocado. Para fundar ello recuerda, ante todo, lo expresado por el Superior Tribunal de Río Negro en ocasión de hacer lugar al recurso de revisión articulado por el actor y declarar la nulidad de la sentencia penal que condenó al demandante, cuando afirmó que, por el origen del gobierno de fuerza que tomó el poder en el año 1976 y provocó la renuncia indebida del imputado y posterior juzgamiento, corresponde que la eventual reparación del daño sea demandada exclusivamente en el fuero federal. Sostiene que la referencia a la necesidad de demandar ante el fuero federal efectuada por la corte provincial viene dada por el origen del gobierno de fuerza que usurpó el poder en 1976, el cual era nacional y no provincial. Al respecto, afirma que fue una autoridad nacional de facto la que provocó la renuncia y posterior juzgamiento del demandante, y no el poder judicial provincial que a la sazón había sido desplazado al igual que las autoridades locales ejecutivas y legislativas. En tal sentido recuerda que la ley 21.258, que declaró en comisión a todos los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales provinciales, era de origen nacional. Interpreta que a partir de marzo de 1976 la provincia de Río Negro perdió la capacidad de darse sus

órganos de gobierno en tanto eran impuestos por una instancia ajena a ella, por lo que frente a tal pérdida de "autarquía" los actos a los que alude el actor (los que provocaron su renuncia y la aceptación de ella, así como su posterior detención, procesamiento y condena) no son imputables a la provincia sino a la autoridad nacional de facto.

El actor evacuó a fs. 303/311 vta. el traslado corrido y solicitó el rechazo de la excepción, cuyo tratamiento fue diferido por el Tribunal para el momento de dictar sentencia (fs. 312).

El Estado provincial, por su lado, intentó contestar la demanda pero su escrito fue desglosado por haber sido presentado cuando había vencido el plazo del traslado respectivo, de acuerdo a lo que surge de la nota de fs. 312 vta.

III. Mediante resolución del quince de abril de 2004 dictada en las actuaciones de igual carátula, que corren por cuerda agregadas al presente, se concedió al actor en un 50% el beneficio de litigar sin gastos, con el alcance establecido por el art. 84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Considerando:

1º) Que frente al prolongado trámite al que ha dado lugar la substanciación de este proceso y la significativa extensión del tiempo transcurrido desde el llamamiento de autos para sentencia, evidentes razones de economía procesal como las señaladas por el Tribunal en el pronunciamiento dictado en la causa P.238.XXVIII. "Punte, Roberto Antonio c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, provincia de s/ cumplimiento de contrato", sentencia del 21 de marzo de 2006 (Fallos: 329:809), así como la adecuada preservación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso que asisten a las partes, en

cuanto comprenden la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a la controversia (Fallos: 319:2151 y sus citas), llevan a dejar de lado en el sub lite el nuevo contorno del concepto de causa civil definido por esta Corte el 21 de marzo de 2006 en la causa “Barreto” (Fallos: 329:759) y, en consecuencia, a mantener su competencia originaria para dictar sentencia definitiva en este asunto.

2º) Que corresponde resolver, en primer lugar, la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar opuesta por la provincia demandada.

El actor dirige su acción contra la provincia de Río Negro con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo sufrir por haber mediado “error judicial como consecuencia de haber sido (el actor) juzgado y condenado injustamente por el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2, Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, a través de su sentencia de fecha 27 de julio de 1978, confirmada con fecha 19 de junio de 1980 por la Cámara de Apelaciones de Viedma” (fs. 214). Al contestar el traslado de la excepción en estudio el actor ratifica el objeto de su pretensión, subrayando que fue condenado en el curso del proceso judicial seguido por los órganos del poder judicial de la provincia (fs. 305), por lo que descarta que el reclamo se pueda imputar a actos del gobierno nacional.

La afirmación que la demandada utiliza como premisa para estructurar todo su desarrollo argumental, por la cual postula la inexistencia de una administración de justicia durante el gobierno de facto que asumió en marzo de 1976, debe desestimarse. Al respecto, se impone reiterar en el presente la doctrina de esta Corte con arreglo a la cual elementales razones de seguridad y continuidad jurídica, la implícita ratificación dada por las autoridades constitucionales a los

actos de los jueces que se desempeñaron entre 1976 y 1983 y la preservación de la regularidad de la transición al normal funcionamiento de las instituciones republicanas, deben conducir al rechazo de planteos de la naturaleza indicada (Fallos: 311:175; 312:2352; 316:2325, entre otros).

3º) Que, por otro lado, los actos de la autoridad de facto de 1976 tampoco pudieron extinguir la personalidad del Estado provincial demandado o suprimir su autonomía. En efecto, la forma federal de gobierno (art. 1º de la Constitución Nacional) y el consecuente reconocimiento de la autonomía institucional de las provincias que el gobierno federal garante (art. 5º) no pudieron verse afectados por el desplazamiento de las autoridades democráticas, ya que a ningún gobierno de facto puede reconocerse un poder más amplio, pleno o extenso que el asignado a un gobierno de *iure*. De acuerdo al régimen federal las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional, y poseen la plenitud normativa correspondiente a su calidad de estado autónomo, que incluye la atribución de darse sus propias instituciones locales y de regirse por ellas (arts. 121, 122 y 123 de la Ley Fundamental; Fallos: 319:1063; causa D.627.XXXVI. “Delbes, Cecilia Laura y otros —por sí y en repres. de sus hijos menores— c/ Municipalidad del Partido de Puán s/ incidente de ejecución”, sentencia del 2 de diciembre de 2004 —Fallos: 327:5416—), sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución (Fallos: 319:308). Al gobierno federal, por su lado, le está prohibido trasponer la frontera de reserva local que establece el art. 122 de la Constitución Nacional, la que expresamente lo instituye garante de cada provincia del goce y ejercicio de sus instituciones.

Al margen de la premisa señalada, lo cierto es que las autoridades provinciales constitucionales surgidas con la

recuperación de la democracia en diciembre de 1983 ratificaron en varias oportunidades —expresa o implícitamente— los actos emanados de las autoridades de facto. En este sentido, si bien el art. 1° de la ley provincial rionegrina 1794, del 24 de enero de 1984, estableció la nulidad de la aplicación concreta en el territorio provincial de la ley nacional 21.258 que había declarado “en comisión” a la totalidad de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, no invalidó por ello los pronunciamientos emitidos por los órganos jurisdiccionales locales durante el período de facto, limitándose a concederles a quienes fueron afectados en su estabilidad el beneficio de la jubilación extraordinaria (art. 10, ley citada).

Asimismo, y con particular referencia al caso, el Juzgado de Instrucción n° 2 provincial, ya en plena vigencia del estado de derecho, reconoció expresamente la validez de la sentencia condenatoria como emanada de un tribunal de su jurisdicción, al rehabilitar al actor por aplicación del art. 20 ter, primer párrafo, del Código Penal (conf. causa n° 22.071 “Incidente de rehabilitación de Vicente González Bellini presentado por el Dr. Larroulet, Néstor”, resolución del 23 de junio de 1997; fs. 17/17 vta.). Una actitud de igual naturaleza tomó el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro con la invocación de su condición de cabeza del poder judicial provincial, al hacer lugar, con fecha 28 de noviembre de 2000, al recurso de revisión articulado por el aquí demandante (conf. expte. 14.538-40 “González Bellini, Guido Vicente s/ recurso de revisión”, fs. 51/63).

4°) Que, por otra parte, si —como ya se ha adelantado— a ningún gobierno de facto puede reconocérsele un poder más extenso que el asignado a un gobierno *de iure*, los límites



constitucionales que corresponden a este último se aplican, por necesaria implicancia, y aún con más razón, al primero. Esta última precisión tiene relevancia porque, a partir de ella, resulta pertinente concluir que la injerencia que tuvieron los actos de la autoridad de facto en los gobiernos de provincia a partir del 24 de marzo de 1976 nunca pudo tener más amplitud, plenitud o extensión que la que hubiera correspondido al gobierno federal *de iure*, de haber procedido a una intervención en los términos del art. 6° de la Constitución Nacional.

Con esta comprensión, cabe afirmar que, así como no puede reputarse que una intervención federal extinga la personalidad jurídica de la provincia intervenida (Fallos: 156:126, especialmente págs. 129/130 y Fallos: 206:341), tampoco los actos de la autoridad de facto de 1976 pudieron tener el efecto de extinguir la personalidad jurídica del estado provincial demandado, ni menos suprimir su autonomía (Bielsa, R., Estudios de Derecho Público, Buenos Aires, 1952, p. 181), o afectar o disminuir su entidad patrimonial (Fallos: 143:11).

En las condiciones indicadas, resulta claro que los actos del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro que han dado lugar a la promoción de la presente demanda, no son imputables al Estado Nacional sino a la propia provincia excepcionante. En este sentido, las designaciones de jueces que pudieran haber hecho los gobernadores de facto en la judicatura rionegrina o la ratificación de aquellos magistrados provinciales que hubieron de ser puestos en comisión según la ley 21.258, han tenido la naturaleza de actos de carácter local, lo cual no puede ser negado ni aun argumentando el origen de la investidura de tales gobernadores de facto (Fallos: 314:1857 y 319:1780). *A fortiori*, los actos cumplidos

por los integrantes del poder judicial rionegrino designados o ratificados en la etapa de discontinuidad institucional de que se trata, tampoco pueden ser tenidos como no emanados de la administración de justicia provincial ni les puede ser desconocida su naturaleza inequívocamente local.

5°) Que tal conclusión, ciertamente, no se ve alterada por la circunstancia —referida por la excepcionante— de que los jueces que dictaron la condena en contra del actor habían sido puestos en comisión según lo previsto por la ley 21.258, pues ello significó solamente suspender o hacer caducar la inamovilidad que les aseguraba el título de sus designaciones efectuadas en el marco de la constitución local, mas no convertir a tales magistrados provinciales en sujetos de una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional.

Más allá de que la decisión del punto no puede estar condicionada, en las circunstancias del caso, por ningún pronunciamiento anterior de otro órgano judicial, tampoco es de peso la dogmática afirmación del superior tribunal cuando —después de hacer lugar al recurso de revisión y en un párrafo final sin conexión alguna con lo pedido ni con lo resuelto— sostuvo que la reparación debía ser demandada en la instancia federal, pues más allá de su inexactitud en los términos señalados, la posición de dicho tribunal revela una contradicción insuperable. Ello, pues de adoptar una postura coherente, y aceptar para todos los efectos la premisa que afirma que el juzgamiento de González Bellini fue responsabilidad de la autoridad nacional, debió haberse declarado incompetente para conocer en la revisión de la sentencia que impuso la condena para dar lugar a la consecuente intervención a la justicia federal; y no, en cambio y sin intentar una explicación de ese modo de proceder, dejar sin efecto la pena como si estuviera al margen de toda controversia que ese

superior tribunal provincial era el órgano habilitado para tomar una decisión de esa índole, por haber sido dictada la condena por un órgano integrante del poder judicial local.

De ahí, pues, que no existen razones para dejar de lado el principio arraigado en el régimen federal que adopta la Constitución Nacional y que reglamenta el Código Civil, en cuanto a que la autonomía política y jurídica de los Estados locales los hace responsables como personas jurídicas distintas del Estado Nacional de las consecuencias dañosas causadas por los actos que llevan a cabo, por lo que corresponde entender que la provincia de Río Negro se halla pasivamente legitimada para estar en juicio y, por ende, que la defensa examinada debe ser rechazada.

6°) Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe recordar que la demanda resarcitoria se funda en el error judicial que el actor le imputa a la provincia accionada por haber sido juzgado y condenado injustamente por el poder judicial local (fs. 214, capítulo I del escrito de demanda).

Al respecto, cabe recordar que una vez restablecido el orden constitucional y con fundamento en que la sentencia condenatoria debía ser considerada inválida con arreglo a lo previsto en la ley 23.062, pues el interesado no había sido destituido del cargo en el cual se desempeñaba según el procedimiento que preveía la constitución local, el actor solicitó ante el tribunal que lo había condenado que declarase la invalidez jurídica del proceso y de la sentencia (presentación del 30 de octubre de 1996 en expte. n° 21.483 "Incidente González Bellini, Guido V. s/ aplicación ley 23.062", fs. 1/4). Si bien la decisión de primera instancia rechazó la aplicación de aquella ley por considerar que el cargo en que revistaba el condenado no contaba con inmunidad constitucional y, además, que éste no había sido destituido por las au-

toridades militares sino que había renunciado, la Cámara en lo Criminal de la 1ra. Circunscripción Judicial de Río Negro revocó dicho pronunciamiento y declaró la nulidad de lo actuado; para así decidir, afirmó que el planteo que examinaba no había invocado la existencia de errores de hecho o violaciones de la ley que surgieran de la sentencia, sino que tenía por objeto impugnar una sentencia condenatoria firme por circunstancias externas al proceso, por lo que, en definitiva, la circunstancia invocada para fundar el pedido configuraba un supuesto de aplicación de la ley penal más benigna que el ordenamiento procesal local contemplaba como una de las causales en que, taxativamente, procedía el recurso de revisión. Con esta comprensión y dado que la competencia para tales asuntos correspondía de modo exclusivo al superior tribunal de justicia local, la cámara declaró la nulidad de lo actuado por violación de la garantía del juez natural (sentencia del 14 de marzo de 1997; fs. 52, 53/53 vta.). Este pronunciamiento fue consentido por González Bellini.

El 7 de abril de 1997, el demandante promovió por ante la jurisdicción local un incidente por el cual solicitó que se lo rehabilitase con respecto a la pena de inhabilitación perpetua que le había impuesto la sentencia condenatoria, obteniendo una decisión favorable con fundamento en el art. 20 ter, primer párrafo, del Código Penal (resolución del 23 de junio de 1997, fs. 17/17 vta. del incidente de rehabilitación que corre por cuerda, antes citado).

Por último, en marzo del año 2000, González Bellini promovió por ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro un recurso de revisión con fundamento en el art. 448, inc. 5º, del Código Procesal Penal rionegrino, que establece la procedencia del recurso de revisión, “en todo tiempo y a favor del condenado, contra las sentencias firmes,

cuando:... 5) corresponda aplicar retroactivamente una ley penal más benigna que la aplicada en la sentencia" (conf. exp. agregado, citado en el considerando 3°).

7°) Que a fs. 51/63 de dicha actuación (causa nº 14.538-40), obra el fallo firme del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, emitido con el voto mayoritario de dos de sus tres miembros, por el cual declara la nulidad de la sentencia dictada en los autos "Franco, Mario José y otros s/ malversación de caudales públicos" (expediente 652/76 y su acumulado 733/76) respecto de Guido Vicente González Bellini.

Para decidir como lo hizo, el máximo tribunal provincial consideró que no constituía un obstáculo formal para la procedencia del recurso de revisión —fundado en la aplicación de la ley más benigna— la circunstancia de que la pena impuesta a González Bellini se encontrase agotada por haber sido rehabilitado en los términos del art. 20 ter, primer párrafo, del Código Penal, toda vez que la constitución local preveía la inhabilitación perpetua de los funcionarios públicos condenados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones. En cuanto al fondo del asunto y en lo que aquí interesa, la nulidad decretada se fundó en la interpretación que la corte provincial hizo de las prescripciones de la ley 23.062, que consideró de aplicación en razón de que el actor fue sometido a proceso penal sin que un jurado de enjuiciamiento lo hubiera removido previamente del cargo en el cual había sido designado en el I.D.E.V.I., exigencia impuesta por el decreto provincial 475/88 y por los arts. 151 y 152 de la constitución local sancionada en diciembre de 1957, a los que ese decreto remitía. Con sustento en esa interpretación, concluyó que los magistrados que resolvieron condenar al actor "carecían de legitimación" para someterlo a proceso por apli-

cación de la ley 23.062 (arts. 1° y 2°); máxime cuando la renuncia presentada por el peticionario a su cargo no podía ser conceptuada como un cese derivado de un acto voluntario, ya que estuvieron ausentes los elementos básicos del discernimiento, la intención y la libertad.

8º) Que es doctrina de esta Corte que sólo puede responsabilizarse al Estado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error. Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley.

En el sub lite, el fallo que declaró procedente el recurso de revisión interpuesto por el actor y anuló la sentencia condenatoria se sustentó en la causal de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna que prevé el art. 448, inc. 5°, del ordenamiento procesal penal provincial, en la medida en que calificó como una norma de esa naturaleza a la ley 23.062 en cuanto consideraba la presencia de un supuesto de "falta de legitimación" en cabeza de los jueces que habían juzgado y condenado al demandante. Ello fue así, pues González Bellini, conforme lo entendió el Tribunal Superior de Justicia local, gozaba de inmunidad jurisdiccional en tanto no fuese destituido con arreglo a lo dispuesto en el anexo al decreto 475, dictado el 24 de febrero de 1988, reglamentario de los arts. 7° y 8° de la ley de creación del I.D.E.V.I. (textos obrantes a fs. 518).

Antes de examinar las consecuencias de este pronunciamiento en el marco de la pretensión de resarcimiento ins-

tada por el condenado, es de interés puntualizar que el art. 448 del código procesal local prevé, con un alcance análogo al que lo hacen diversas legislaciones del derecho público provincial y el Código Procesal Penal de la Nación, otros supuestos típicos en que procede el recurso de revisión, como el de inconciliabilidad de sentencias en estado de cosa juzgada; el de falsedad de la prueba documental o testifical que fundó la condena; el de sentencia dictada u obtenida mediante la comisión de un delito; y, la superveniencia o descubrimiento de nuevos hechos o elementos de pruebas. Mas en todos estos supuestos y a diferencia del invocado por González Bellini —en que la aplicación de la ley penal más benigna procede por mandato constitucional y con abstracción de que la ley procesal contemple, o no, una instancia típica o reglada para su tramitación— el recurrente debe demostrar como presupuesto insoslayable la inexistencia del hecho, que el condenado no lo cometió o que falta toda prueba para sostener una condena (art. 449), carga respecto de la cual, se reitera, está liberado el peticionario cuando promueve la revisión con apoyo en la causal por la cual optó el demandante.

9°) Que, en casos como el presente, la sola anulación o revocación de la sentencia condenatoria dictada en una causa penal, a raíz de una instancia apta como lo es el recurso de revisión, es condición necesaria pero no suficiente para responsabilizar civilmente al Estado por un acto dictado en ejercicio de su función jurisdiccional.

Ello es así, pues la reparación sólo procede cuando resulta manifiesta la materialidad de la equivocación, lo que presupone un resultado erróneo, no ajustado a la ley.

Y resulta evidente que en el sub lite tal recaudo es inexistente ya que no puede calificarse de equivocada a la actividad jurisdiccional que se limitó a aplicar, sobre la

base de presupuestos fácticos y jurídicos cuya certeza no ha sido puesta en tela de juicio por el demandante, la legislación vigente al tiempo de dictarse todos y cada uno de los actos integrantes del proceso que culminó, finalmente, con un fallo condenatorio.

Es que la aplicación retroactiva de leyes penales más benignas, por definición materialmente posteriores al dictado de la sentencia, descarta el error judicial y sólo producirá los efectos que ellas determinen en cada caso como extinción o reducción de la pena, absolución por inexistencia de la figura penal, invalidez jurídica del acto procesal de que se trate por “falta de legitimación” de los jueces, etc.; pero no la responsabilidad del Estado por la indemnización de los daños que se invocan como sufridos por el condenado, si dicha imputación es juzgada a la luz de los presupuestos que deben verificarse para dar lugar a un débito de esa naturaleza.

En el caso concreto de autos, tanto la ley nacional 23.062 como el decreto provincial 475/88 —en los que se basó la sentencia del superior tribunal local para anular el fallo condenatorio— fueron sancionados con posterioridad a la tramitación del proceso que concluyó en la sentencia condenatoria cuya legitimidad se cuestiona. Esta situación descarta por sí sola la existencia material de error judicial, pues no existió una errónea apreciación de los hechos ni una equivocada aplicación del ordenamiento jurídico vigente. Falta, por lo tanto, el presupuesto esencial para la procedencia de la demanda instaurada, cual es la existencia material del error judicial que haya dado lugar a un pronunciamiento condenatorio contra una persona inocente.

10) Que, por otro lado, la operatividad de la ley 23.062 se circunscribe a su calificación, compartida por el



demandante y el superior tribunal local, como ley penal más benigna sin que pueda inferirse que el fallo que hizo lugar al recurso de revisión de la sentencia hubiera importado reconocer la comprobación de la inocencia del actor. Lo contrario significaría, más allá de la nulidad de la condena decretada con fundamento en la ley penal más benigna, admitir que por vía de esta acción resarcitoria se revisara el acierto o error de una decisión del poder judicial que, en cuanto se refiere a la existencia de los hechos constitutivos del delito, su autoría, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, no ha sido alterado por dicho ordenamiento.

11) Que, al respecto, la calificación dada por el propio interesado a aquel texto normativo como un supuesto de ley penal más benigna, juicio que fue compartido por el superior tribunal local para declarar procedente el recurso de revisión, excluye todo examen sobre el hipotético error del pronunciamiento condenatorio y, como consecuencia, sobre la inocencia o culpabilidad del interesado. Ello es así, pues aquella causal —a diferencia de los otros casos de procedencia del recurso mencionado— no encuentra su razón de ser en el sitio preeminente que en el sentido de justicia de la sociedad alcanza la revisión de una condena dictada erróneamente contra una persona que se sabe inocente por sobre el respetable interés estatal en preservar la estabilidad de las sentencias judiciales y la seguridad jurídica, para remitir —en cambio— a razones institucionales o de política criminal que son de exclusivo resorte del Congreso de la Nación y que ninguna relación guardan con un error judicial que hubiera dado lugar a una sanción privada de validez por ese motivo.

De ahí, pues, que no puede ser aceptada una postura como la sostenida por la actora, que pretende extender a la revisión que obtuvo de su condena penal bajo el exclusivo

amparo de las razones de oportunidad, mérito y conveniencia institucional sopesadas por el Congreso de la Nación para sancionar la ley 23.062, las consecuencias que las normas constitucionales e infraconstitucionales en juego únicamente reconocen -como la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados- cuando la privación de efectos del pronunciamiento condenatorio firme tiene su origen en la convicción de que ha sido condenada erróneamente una persona que demuestra ser inocente. En otras palabras, el actor que se ha beneficiado con una decisión política tomada por el Congreso de la Nación y por el Poder Ejecutivo al poner en vigencia la ley 23.062, no puede prevalerse de los efectos que únicamente son de aplicación cuando la revisión se disciplina como el remedio encaminado al triunfo de la inocencia frente al error judicial, de las razones de la justicia por sobre la razón de la seguridad jurídica.

Debe ser recordado aquí que si el demandante optó por una vía procesal que le permitía dejar sin efecto una sentencia condenatoria firme sin tener que demostrar su inocencia ni que la decisión jurisdiccional había incurrido en un error, no puede pretender -sin infringir el principio de la buena fe en cuanto exige atenerse a los actos propios deliberadamente cumplidos y jurídicamente relevantes- que se le extiendan las consecuencias que las normas en vigencia sólo reconocen a otras causales de revisión que la invocada por el interesado, que por ende debe aceptar ahora los limitados efectos de la causal que postuló en su favor así como antes se favoreció cuando la invocó en su beneficio.

Adviértase hasta qué punto ello es así, que aun en la hipótesis en que la revisión se funda en la presencia de un contraste jurisdiccional intolerable, como el de fallos inconciliables, el ordenamiento procesal local mantiene inal-

terada su exigencia de que el condenado demuestre su inocencia (arts. 448, inc. 1° y 449), reconociendo por ende una consideración preeminente a la injusticia de la condena, al punto que sólo exime de esta prueba en la atípica y particular causal invocada por el demandante y, precisamente, en razón de una naturaleza *sui generis* que singulariza todo su régimen.

12) Que la solución propuesta encuentra fundamento inequívoco en el ordenamiento jurídico positivo. En efecto, el art. 14.6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos condiciona la indemnización en el caso de sentencias condenatorias firmes ulteriormente revocadas, a que un hecho ulterior sea plenamente probatorio de "...la comisión de un error judicial". Por su lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más allá de contemplar que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios (art. 7.3), que no es el supuesto de error en que se fundó la demanda, también supedita la procedencia del resarcimiento a favor de una persona para el caso "...de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial" (art. 10).

13) Que, por lo demás, es de interés subrayar que la demandante ha omitido toda referencia a las disposiciones de naturaleza local concernientes a la responsabilidad de la provincia de Río Negro para situaciones como la examinada, a pesar de que la ley fundamental rionegrina expresamente contempla el punto al disponer que la reapertura de las causas penales sólo procede cuando "...se tuviera prueba de la inocencia del condenado..." y, con particular referencia a la situación de una persona condenada por error que "...si de la revisión de una causa penal resulta su inocencia, la provincia indemniza los daños materiales y morales, si hubiere culpa" (art. 19). Por su lado, el código procesal penal local —al contemplar el recurso de revisión— también establece como

presupuesto para la responsabilidad patrimonial del estado provincial “la existencia de una sentencia de la que resulta la inocencia del condenado” (art. 457).

14) Que con respecto al reclamo de resarcimiento pecuniario por el tiempo de encarcelamiento cautelar que cumplió el demandante, corresponde señalar que aquél no ha alegado ni probado que dicha prisión preventiva haya sido infundada o arbitraria, lo que resulta suficiente para desestimar el pedido —confr. “Gerbaudo”( Fallos: 328:4175)—. En realidad, el presentante ha condicionado este agravio particular a la suerte de lo que ha sido la base de su reclamo central, que ha sido desestimado, esto es la supuesta invalidez de la sentencia de condena.

15) Que, en definitiva, esta Corte juzga que la aplicación de la ley 23.062, a la luz de su consideración como ley penal más benigna que llevó a cabo el superior tribunal rionegrino para revisar la sentencia condenatoria, es manifiestamente insuficiente para sustentar la demanda en la medida en que el actor no ha acreditado la existencia de un error judicial, ni de su inocencia en los hechos que dieron lugar a la condena revisada, todo lo cual descarta cualquier tipo de débito en cabeza del Estado a título de responsabilidad civil con arreglo a las normas jurídicas que la regulan.

Por ello, se resuelve: Rechazar la demanda seguida por Guido Vicente González Bellini contra la provincia de Río

-//-

G. 848. XXXVII.

ORIGINARIO

González Bellini, Guido Vicente c/ Río Negro, provincia de s/ daños y perjuicios.

-//-Negro. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, devuélvanse los expedientes agregados y, oportunamente, archívese. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA (en disidencia)- E. RAUL ZAFFARONI (en disidencia)- CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

DISI -//-



-//-DENCIA DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON JUAN CARLOS MAQUEDA Y DON E. RAÚL ZAFFARONI

Resulta:

I. A fs. 213/249 se presenta Guido Vicente González Bellini y promueve demanda contra la provincia de Río Negro con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia del error judicial cometido en ocasión de haber sido condenado por el Juzgado n° 2 en lo Criminal y Correccional, Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Viedma, mediante sentencia de fecha 27 de julio de 1978, confirmada por la Cámara de Apelaciones de Viedma el 19 de junio de 1980.

Dice que por decreto provincial 23/73 fue designado interventor del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior de Río Negro (en adelante I.D.E.V.I.), asumiendo las tareas previstas en la ley 597 para el Administrador General de dicho ente. Entiende que por ello gozaba de la garantía prevista por el decreto local 475 —reglamentario de la ley 200, que creó el instituto— para el cargo de Presidente del Consejo de Administración, según la cual su remoción, antes del vencimiento del respectivo mandato, solamente podía tener lugar por el procedimiento establecido en los arts. 151 y 152 de la constitución provincial, esto es, por acusación ante un jurado de enjuiciamiento.

Señala que después de producirse el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 fue obligado a presentar su renuncia al cargo de interventor que continuaba desempeñando en el I.D.E.V.I., la que fue aceptada por el interventor militar mediante el decreto 165 del 2 de abril de ese año.

Relata que meses más tarde, el 2 de agosto de 1976, fue detenido en la ciudad de General Roca por personal policial de la provincia e inmediatamente trasladado a la unidad

carcelaria de Viedma, y que dos días después fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 1616/76. Indica que las actuaciones correspondientes a la instrucción policial fueron remitidas el 31 de agosto de 1976 al Juzgado n° 2 en lo Criminal y Correccional, Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Viedma y con fecha 9 de septiembre se solicitó al Ministerio del Interior de la Nación que fuera puesto a disposición del tribunal a efectos de tomarle declaración indagatoria. Este último acto procesal tuvo lugar el 13 de septiembre siguiente, imputándosele los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público, ambos en forma reiterada y en concurso real, en el marco de la causa n° 652/76 "Franco, Mario José y otros s/ malversación de caudales públicos y otros" y su acumulada n° 733/76 "González Bellini, Guido Vicente; Montoto, José Osvaldo y Marchisio, Luciano Alberto (ex funcionarios del I.D.E.V.I.) s/ malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario publico, abuso de autoridad reiterada".

Menciona que a mediados de septiembre de 1976 el juzgado interviniente dispuso convertir en prisión preventiva la detención que soportaba, ordenar la inhibición general de sus bienes, así como trabar embargo sobre el automotor de su propiedad hasta cubrir la suma de \$ 3.000.000 (ley 18.188). Tal decisión fue confirmada por la cámara de apelaciones.

Expresa que por decreto 2142/76 se dejó sin efecto su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero que continuó detenido hasta el 11 de noviembre de 1977 en que la cámara del crimen provincial le concedió la excarcelación bajo caución real de \$ 1.500.000 (ley 18.188), recuperando la libertad días después. Afirma que, en total, permaneció detenido quince meses y doce días, de los cuales los primeros 41



días —período en el que estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional— los cumplió incomunicado en una celda de castigo y aislamiento.

Señala que el 27 de julio de 1978 la titular del juzgado rionegrino dictó sentencia única en las causas 652/76 y 733/76, antes aludidas, condenándolo a la pena de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de caudales públicos en concurso ideal con el delito de violación de los deberes de funcionario público, en forma reiterada. Tal pronunciamiento fue confirmado por la cámara de apelaciones y quedó firme al rechazar esta Corte una queja por denegación del recurso extraordinario federal, con fecha 23 de febrero de 1982.

Manifiesta que en 1997 solicitó y obtuvo del juzgado que lo había condenado la rehabilitación en los términos del art. 20 ter. primer párrafo, del Código Penal.

De modo particular destaca que en marzo de 2000 promovió un recurso de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro contra la sentencia condenatoria del 27 de julio de 1978, para lo cual invocó la causal prevista en el art. 448, inc. 5° del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, que contempla la procedencia de dicha vía en los casos de aplicación retroactiva de una ley más benigna. Expone que el tribunal hizo lugar al recurso interpuesto y declaró la nulidad de la sentencia única dictada en las causas 652/76 y 733/76, extremo que estima suficiente para la procedencia de la responsabilidad del Estado por un error judicial que lo llevó a una injusta detención y posterior condena. Solicita el resarcimiento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que considera derivados de la irregular actuación del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, los que son detallados y cuantificados en la demanda sin perjuicio de lo que en más o

en menos resultare de la prueba. Solicita intereses e imposición de costas.

II. A fs. 270/283 se presenta la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro y opone la excepción de falta de legitimación para obrar a su respecto, en los términos del art. 347, inc. 3°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Sustenta esa defensa argumentando que la responsabilidad que se postula en la demanda corresponde, en verdad, al Estado Nacional, pues han sido sus órganos los causantes del error judicial invocado. Para fundar ello recuerda, ante todo, lo expresado por el Superior Tribunal de Río Negro en ocasión de hacer lugar al recurso de revisión articulado por el actor y declarar la nulidad de la sentencia penal que condenó al demandante, cuando afirmó que, por el origen del gobierno de fuerza que tomó el poder en el año 1976 y provocó la renuncia indebida del imputado y posterior juzgamiento, corresponde que la eventual reparación del daño sea demandada exclusivamente en el fuero federal. Sostiene que la referencia a la necesidad de demandar ante el fuero federal efectuada por la corte provincial viene dada por el origen del gobierno de fuerza que usurpó el poder en 1976, el cual era nacional y no provincial. Al respecto, afirma que fue una autoridad nacional de facto la que provocó la renuncia y posterior juzgamiento del demandante, y no el poder judicial provincial que a la sazón había sido desplazado al igual que las autoridades locales ejecutivas y legislativas. En tal sentido recuerda que la ley 21.258, que declaró en comisión a todos los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales provinciales, era de origen nacional. Interpreta que a partir de marzo de 1976 la provincia de Río Negro perdió la capacidad de darse sus órganos de gobierno en tanto eran impuestos por una instancia

ajena a ella, por lo que frente a tal pérdida de "autarquía" los actos a los que alude el actor (los que provocaron su renuncia y la aceptación de ella, así como su posterior detención, procesamiento y condena) no son imputables a la provincia sino a la autoridad nacional de facto.

El actor evacuó a fs. 303/311 vta. el traslado corrido y solicitó el rechazo de la excepción, cuyo tratamiento fue diferido por el Tribunal para el momento de dictar sentencia (fs. 312).

El Estado provincial, por su lado, intentó contestar la demanda pero su escrito fue desglosado por haber sido presentado cuando había vencido el plazo del traslado respectivo, de acuerdo a lo que surge de la nota de fs. 312 vta.

III. Mediante resolución del quince de abril de 2004 dictada en las actuaciones, de igual carátula, que corren por cuerda agregadas al presente, se concedió al actor en un 50% el beneficio de litigar sin gastos con el alcance establecido por el art. 84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Considerando:

1º) Que frente al prolongado trámite al que dio lugar la substanciación del proceso y la significativa extensión del tiempo transcurrido desde el llamamiento de autos para sentencia, evidentes razones de economía procesal, así como la adecuada preservación de las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso que asisten a las partes, en cuanto comprenden la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a la controversia, llevan a dejar de lado el nuevo contorno del concepto de causa civil definido por la Corte y mantener su competencia originaria para dictar sentencia definitiva.

2º) Que corresponde resolver, en primer lugar, la

excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la provincia demandada.

El actor dirige su acción contra la provincia de Río Negro con el objeto de obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios que dijo sufrir por haber mediado "error judicial como consecuencia de haber sido (el actor) juzgado y condenado injustamente por el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 2, Primera Circunscripción Judicial de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, a través de su sentencia de fecha 27 de julio de 1978, confirmada con fecha 19 de junio de 1980 por la Cámara de Apelaciones de Viedma" (fs. 214). Al contestar el traslado de la excepción en estudio el actor ratifica el objeto de su pretensión, subrayando que fue condenado en el curso del proceso judicial seguido por los órganos del poder judicial de la provincia (fs. 305), por lo que descarta que el reclamo se pueda imputar a actos del gobierno nacional.

3°) Que la afirmación que la demandada utiliza como premisa para estructurar todo su desarrollo argumental, por la cual postula la inexistencia de una administración de justicia durante el gobierno de facto que asumió en marzo de 1976 debe desestimarse. En efecto, la condición de persona jurídica de carácter público de las provincias argentinas permaneció incólume inclusive frente a la ruptura del orden constitucional y en tal entendimiento son responsables por las obligaciones resarcitorias que le fuesen imputables desde el tradicional precedente de esta Corte "Ferrocarril Oeste", sentencia del 3 de octubre de 1938 (Fallos: 182:5; arts. 33, 42 y 43 del Código Civil; arts. 1°, 5°, 121, 122 de la Constitución Nacional).

Ello es así, porque la vigencia de las autonomías provinciales durante los períodos de interrupción del orden constitucional ha sido reconocida implícitamente por esta

Corte al establecer la doctrina según la cual la restitución de dicho orden en el país requiere que los poderes del Estado Nacional o de las provincias, en su caso, ratifiquen o desechen explícita o implícitamente los actos del gobierno de facto (Fallos: 311:1826; 312:326, entre otros).

4°) Que en tal entendimiento, cuando la ley 1794 —sancionada por el poder legislativo provincial una vez reinstaurado el estado de derecho— declaró la nulidad de la aplicación concreta en el territorio provincial de la ley nacional 21.258 (que declaró “en comisión” a la totalidad de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y de las provincias), implícitamente reconoció la validez de los actos dictados a su amparo al no disponer la reincorporación de los agentes alcanzados por la norma declarada nula, reconociéndoles únicamente el beneficio de la jubilación extraordinaria (art. 10).

5°) Que, en ese sentido, y con particular referencia al caso, se advierte que las autoridades provinciales constitucionales surgidas con la recuperación de la democracia en diciembre de 1983 ratificaron lo actuado por el poder judicial provincial durante la dictadura, pues el Juzgado de Instrucción n° 2, ya en plena vigencia del estado *de iure*, reconoció expresamente la validez de la sentencia condenatoria como emanada de un tribunal de su jurisdicción, al rehabilitar al actor por aplicación del art. 20 ter, primer párrafo, del Código Penal. Una actitud de igual naturaleza tomó el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro con la invocación de su condición de cabeza del poder judicial local, al hacer lugar, con fecha 28 de noviembre de 2000, al recurso de revisión articulado por el aquí demandante (conf. expte. 14-538-40 “González Bellini Guido Vicente s/ recurso de revisión”, fs. 51/63).

En tales condiciones, la intervención que tomaron dos órganos judiciales provinciales cuando se hallaban en pleno funcionamiento las instituciones constitucionales, al considerarse competentes para dictar sendos pronunciamientos tendientes a dilucidar los efectos y la subsistencia de la sentencia que condenó a González Bellini en 1978, presupone la inequívoca naturaleza de esa decisión como acto jurisdiccional local y, por ello, imputable a la provincia demandada.

De ahí que no existen razones para dejar de lado el principio arraigado en el régimen federal que adopta la Constitución Nacional y que reglamenta el Código Civil, en cuanto a que la autonomía política y jurídica de los estados locales los hace responsables como personas jurídicas distintas del Estado Nacional de las consecuencias dañosas causadas por los actos que llevan a cabo, por lo que corresponde entender que la provincia de Río Negro se halla pasivamente legitimada para estar en juicio y, por ende, que la defensa examinada debe ser rechazada.

6°) Que, en cuanto al fondo del asunto, corresponde indicar en primer término que la suerte del reclamo por daños y perjuicios contra la provincia se encuentra condicionada a la declaración de ilegitimidad del acto que produjo el daño alegado. En efecto, esta Corte tiene dicho que para reconocer la posibilidad de responsabilizar al Estado por error judicial, el acto jurisdiccional que origina el daño debe ser previamente declarado ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide juzgar que hay error. De lo contrario la acción de daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido por la ley (Fallos: 311:1007; 319:2527, entre otros).

7°) Que, en el sub lite, el presupuesto ineludible para reconocer el resarcimiento fue cumplimentado en sede local mediante la sentencia del máximo tribunal provincial que declaró la nulidad de todo lo actuado respecto del actor. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1050 del Código Civil, la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo o igual estado en que se hallaban antes del acto anulado. La aplicación al caso de esta norma conduce, como lo advirtió el Superior Tribunal en su sentencia, a admitir el resarcimiento de los perjuicios sufridos como consecuencia del acto anulado. Ello es así por cuanto la declaración de nulidad, en los términos y con los alcances del precepto citado, dejó huérfana de sustento la imposición de la condena e importó la declaración de la inexistencia de causa del acto.

8°) Que, en segundo término, con el ánimo de delimitar la extensión de la competencia que corresponde desplegar a esta Corte para conocer en el caso bajo examen, cabe señalar que la sentencia del superior tribunal provincial en autos "González Bellini, Guido Vicente s/ recurso de revisión" fue dictada con arreglo a la legislación local vigente en el momento en que se la pronunció y constituyó un acto jurisdiccional válido para obtener el resultado al que se arribó. Por lo demás, tal decisión no fue impugnada por la vía del art. 14 de la ley 48.

Asimismo, la revisión jurisdiccional importó el examen de normas y de actos de autoridades provinciales, que fueron interpretados por el máximo tribunal de Río Negro en su espíritu y bajo los efectos que la soberanía local ha querido darles, de manera que pudiesen ser aplicados a las consecuencias derivadas de la relación jurídica entre la provincia y el actor en su condición de ex interventor de un orga-

nismo de ese estado provincial.

9°) Que, además, el referido pronunciamiento constituyó la definición de una cuestión que adquirió el carácter de cosa juzgada en sede local. En ese sentido, conocida jurisprudencia de este Tribunal ha conferido jerarquía constitucional a la cosa juzgada (Fallos: 224:657; 250:435; 252:370; 259:289), en razón de que la inalterabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por sentencia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y de defensa en juicio (Fallos: 199:466; 258:220; 281:421) y que la estabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad señalada (Fallos: 319:2527).

10) Que, en las condiciones expresadas, no puede considerarse que procede en este pleito de naturaleza originaria examinar las circunstancias fácticas y jurídicas ventiladas en el proceso de revisión que tramitó y feneció en sede provincial, pues indagar en ese sentido implicaría habilitar a esta Corte a expedirse sobre un punto ya juzgado. Tal conclusión —a más de quebrantar el principio de la cosa juzgada en los términos previamente referidos— resultaría ajena a la competencia prevista en la segunda parte del art. 117 de la Constitución Nacional en la medida en que significaría lisa y llanamente consagrar una prerrogativa a favor de las instituciones de orden nacional por sobre las provinciales, en flagrante vulneración del sistema federal plasmado en la Ley Fundamental.

En efecto, la solución del pleito no admite el examen de instituciones de derecho público local, pues hacer mérito de tales circunstancias resulta impropio del cometido que le incumbe al Tribunal cuando interviene en su instancia originaria. Ello es así porque las provincias conservan todo el poder no delegado constitucionalmente al gobierno federal



(arts. 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional) y ejercen en plenitud las facultades correspondientes a su calidad de estado autónomo cuando exigen que se reserve a los jueces locales el conocimiento y decisión de las causas que versen, en lo sustancial, sobre aspectos propios del derecho provincial. Ello, obviamente, sin perjuicio de que —con posterioridad— las cuestiones federales que también puedan estar involucradas en dichos pleitos tengan adecuada tutela por medio del recurso extraordinario, aspecto que en el sub examine, como se ha señalado, no ha tenido lugar.

11) Que, sentado lo expuesto, es procedente destacar que el demandado no ha producido prueba tendiente a refutar las alegaciones del actor sobre la magnitud de los daños sufridos; no ha aportado elemento alguno que permita atenuar la formulación de un reproche subjetivo a su conducta; tampoco se ha pronunciado respecto de la existencia del daño, ni ha negado la relación de causalidad directa y relevante entre el actuar del estado provincial y el menoscabo cuya reparación se persigue, sino que se ha limitado a formular la excepción ya desestimada en los considerandos 2° a 5°, a presentar la contestación de demanda fuera de término por lo que fue desglosada por extemporánea (fs. 312 vta.), y a considerar en su alegato que la prueba presentada por el actor era "intrascendente" (fs. 628).

Frente a esta circunstancia, con arreglo a lo establecido en el art. 9° inciso 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional) el cual dispone que: "toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener reparación", corresponde tener por verdaderos los hechos expuestos en la demanda y por reconocidos los documentos ofrecidos, en los

términos del art. 356, inciso 1°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

12) Que, resta examinar entonces la pretensión indemnizatoria del actor, que se sustenta —según la lectura del escrito de demanda (fs. 213/249)— en los daños generados directamente imputables a los órganos del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro. El actor alega que tales actos le causaron graves daños, tales como: 1°) el lucro cesante sufrido por haberse visto impedido de ejercer su profesión de ingeniero durante el período de su detención; 2°) la devaluación de (a) un automotor que se originó en la imposibilidad de disponer de aquél por la orden del juzgado interviniente de embargarlo al dictar la prisión preventiva del actor el 15 de septiembre de 1976; (b) del dinero depositado en una entidad bancaria, de bonos-cédulas hipotecarias y (c) de un inmueble, los cuales constituyeron la caución real de la excarcelación concedida el 11 de noviembre de 1977; 3°) el daño moral producto de la privación ilegítima de su libertad durante quince meses y doce días, y el desprestigio “personal y profesional” padecido por tener sentencia condenatoria en su contra; 4°) el daño psíquico que el encarcelamiento le habría causado; y 5°) los perjuicios ocasionados por las dificultades para salir del país, pues “cada vez que se pretendió ejercer este derecho (...) se suscitaron distintos inconvenientes con los organismos de control relativos a los trámites para la obtención de la documentación (pasaporte) y de migraciones” (fs. 240).

13) Que es menester puntualizar la pretensión del actor en los diversos rubros en que se concreta el reclamo resarcitorio petitionado. Así, en cuanto al daño patrimonial alegado en primer término, esta Corte ha establecido que el

lucro cesante está configurado por las ventajas económicas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas debida y estrictamente comprobadas (Fallos: 306:1849), cuya admisión requiere una acreditación suficiente del beneficio económico (Fallos: 311:2683), extremo que indubitadamente no ha ocurrido en autos, pues la demanda y la prueba testifical ofrecida en apoyo de su pretensión sólo traslucen conjeturas sobre un hipotético devenir profesional del actor. Conviene precisar además que —tal como lo explica en el escrito de inicio— la vinculación profesional con su empleador se reanudó una vez concedida la excarcelación en febrero de 1978, de lo cual se desprende que en ese momento, y por los cuatro años subsiguientes en los que realizó tareas como director y representante técnico de esa misma empresa (fs. 231 y testimonio de Eduardo Francisco Cortés, fs. 389/390), la relación laboral no fue afectada por el “estigma” que invoca como fundamento de su reclamo resarcitorio. En última instancia, tampoco acredita que la relación laboral haya terminado en 1982 por los motivos discriminatorios alegados.

Sobre la desvalorización del automotor —rubro 2(a)— cabe apuntar por un lado, que el actor no acreditó —siquiera especificó— el perjuicio que le habría ocasionado la indisponibilidad del automóvil durante el lapso por el que demandó la reparación; por el otro, que —de haberlo hecho— la sola circunstancia de que el automóvil estuviese sujeto a embargo no implica que permaneciese fuera de uso y circulación, por lo que no corresponde indemnizar el normal deterioro que sufrió el mismo en ese tiempo.

Con respecto al rubro señalado como 2 (b), se advierte que la imposibilidad de disponer de los fondos impuesta por el estado provincial no derivó de la conducta estatal que origina el reclamo resarcitorio, sino de la decisión del actor

de entregarlos en caución real para obtener la excarcelación. Por consiguiente, la pérdida de la renta que el actor hubiese obtenido de haber podido invertirlos en el mercado financiero le es exclusivamente atribuible, en la medida en que no demostró la ausencia de otros recursos económicos para satisfacer la caución.

En lo referente al rubro 2 (c) —sin perjuicio de que el propio demandante reconoce que el departamento no era de su propiedad y en tanto que tampoco acredita por qué le habrían correspondido las eventuales sumas percibidas a título de alquiler— la condena al pago del valor locativo de un inmueble en concepto de lucro cesante debe apoyarse en el examen de elementos probatorios que demuestren adecuadamente la existencia de una locación, o, al menos, la intención de concretarla. Por lo tanto, no corresponde admitir el pago del rubro por el mero hecho de afirmar que el bien no pudo ser alquilado, pues no hay elemento en autos que pruebe fehacientemente tal imposibilidad (Fallos: 311:1445).

14) Que, además, el actor reclama la reparación del daño moral experimentado como consecuencia de haber pasado quince meses y doce días en prisión, con la incertidumbre de que “su detención se prolongara arbitrariamente tal como sucedió a muchos ciudadanos argentinos. Las condiciones de detención a las que fue sometido en la Unidad Carcelaria de Viedma, recluido en celdas especiales de castigo y aislamiento, incomunicado durante cuarenta y un días y posteriormente encarcelado (no obstante su condición de procesado) en un pabellón en el cual más del cincuenta por ciento (50%) de la población carcelaria estaba conformada por condenados por el delito de homicidio, violando palmariamente de ese modo las más elementales reglas legales de detención de procesados...” (fs. 236 vta.).

Por cierto, la prolongada privación de la libertad por causa de un proceso que finalizó con la nulidad de todo lo actuado fue para él fuente de aflicciones espirituales que justifican el resarcimiento, en las circunstancias, por la sola configuración del hecho dañoso que se trata y su particular naturaleza, así como la índole de los derechos comprometidos. A fin de la fijación del *quantum* debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tienen necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste. Cabe por lo tanto fijar en este rubro \$ 200.000.

15) Que, el demandante reclama también el resarcimiento del daño psíquico irreversible que dice haber sufrido por su traumática experiencia carcelaria a raíz de la actuación del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro (cuarto rubro). Al respecto, esta Corte ha expresado que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes tanto físicas como psíquicas esta incapacidad debe ser reparada, en la medida en que asume la condición de permanente (Fallos: 326:1299).

De acuerdo con este criterio el reclamo es procedente, pues el informe de la perito psicóloga concluye que “los hechos que motivan esta litis han dejado secuelas permanentes a nivel del psiquismo del peritado (...) Se ha generado una detención a nivel emocional manifestándose como una marcada inseguridad con sentimientos de desvalorización y de pérdida de la autoestima, con componentes persecutorios por vivencias culpógenas no resueltas que remiten a la experiencia carcelaria” (fs. 449/450) de lo que cabe inferir la persistencia del contenido dañoso traumático de la detención sufrida. Por tal razón, se fija en tal concepto la suma de \$

50.000.

16) Que finalmente, el quinto rubro no es procedente porque los padecimientos alegados —que no fueron acreditados— no le serían imputables a la actividad de la provincia de Río Negro, sino al funcionamiento de dependencias del Estado Nacional (fs. 240 vta.) ajeno a estos autos.

17) Que, en consecuencia de las pautas y las circunstancias apuntadas del caso, se cuantifica la reparación total en la suma de \$ 250.000 a valores actuales que devengará intereses, a partir de la fecha de notificación de la presente, a la tasa que corresponda según la legislación que resulte aplicable (Fallos: 316:165 y 321:3513).

Por ello, se resuelve: Hacer lugar parcialmente a la demanda con el alcance y limitaciones que resultan de los considerandos 14, 15 y 17 del presente pronunciamiento. Con costas en el orden causado. Notifíquese, devuélvanse los expedientes agregados, y oportunamente, archívese. JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.

ES COPIA

Parte actora: **Guido Vicente González Bellini**, patrocinado por los **Dres. Juan Manuel Hubeñak, Patricia Susana Manes Marzano, Maximino Daniel Braga Rosado y Eduardo Mertehtikian**.

Parte demandada: **provincia de Río Negro —Fiscalía de Estado—** representada por el **Dr. Carlos Alberto Pega** y patrocinada por el **Dr. Cosme Andrés Nacci**.